

Señores,

**JUZGADO CIRCUITO BOGOTÁ**

**REPARTO**

**REFERENCIA:** ACCIÓN DE TUTELA.

**ACCIONANTE:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

**ACCIONADO:** MINISTERIO DE VIVIENDA - FONVIVIENDA.

**DERECHO VULNERADO:** PETICIÓN.

**ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA.**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal que se anexa, sociedad debidamente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, sometida al control y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia e identificada con el NIT. 860.524.654-6, acudo ante su despacho para instaurar **ACCIÓN DE TUTELA** en contra del i) **NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**, Ministerio que fue creado mediante el artículo 14 de la Ley 1444 de 2011, cuyos objetos y funciones serán los escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Territorio, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1444 de 2011 y representado por la señora **HELGA RIVAS**, en su calidad de Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio o quien haga sus veces, y (ii) **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (FONVIVIENDA)** el cual se creó mediante el Decreto Ley 555 de 2003, como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia, sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y representado por la señora **MARICELA PATIÑO CHIA** o quien haga sus veces, en aras de que se conceda el amparo del derecho fundamental de petición, toda vez que la accionada no ha respondido de fondo la solicitud incoada ante tal dependencia el pasado 3 de enero de 2025.

## I. PARTES Y REPRESENTANTES.

### ACCIONANTE:

**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, identificada con NIT. 860.524.654-6, con domicilio principal ubicado en la Cl 100 No. 9 A -45 P 12 de Bogotá D.C, con dirección de notificación electrónica [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co) y [notificaciones@gha.com](mailto:notificaciones@gha.com), representada legalmente por José Iván Bonilla Pérez identificado con cedula No. 79.520.827 como consta en el certificado de existencia y representación legal.

### ACCIONADO:

- **NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**, entidad territorial representada legalmente por la señora HELGA MARÍA RIVAS ARDILA, en su calidad de ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio o quien haga sus veces, e identificada con Nit No. 900.463.725, con dirección de notificación física en la Calle 17 No. 9 - 36 piso 3, Bogotá, D. C., Colombia y electrónica a los correos: [notificacionesjudici@minvivienda.gov.co](mailto:notificacionesjudici@minvivienda.gov.co) y [correspondencia@minvivienda.gov.co](mailto:correspondencia@minvivienda.gov.co)
- **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA**, el cual se creó mediante el Decreto Ley 555 de 2003, como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia, sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, representada por **MARICELA PATIÑO CHIA** en su calidad de representante legal, con dirección electrónica de notificación [notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co](mailto:notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co)

## II. HECHOS.

**PRIMERO:** El 3 de enero de 2025 se elevó petición respetuosa ante el MINISTERIO DE VIVIENDA en los siguientes términos:

### PETICIÓN.

Solicito respetuosamente se remita con destino al suscrito los expedientes digitales completos y actualizados de los procesos de cobro coactivo N°004 de 2022 y 026 de 2022, así como los que se encuentren vigentes y que fueron abiertos en virtud de las resoluciones 0122 del 26 de febrero de 2018, 0152 del 02 de marzo de 2018 y 1714 del 08 de julio de 2021; toda vez que no se han notificado actuaciones adicionales a las conocidas desde el mes de julio del 2024 en donde se envió el último acceso al expediente.

Como se evidencia, se solicitó el expediente completo y actualizado (es decir con actos,

constancias de ejecutoria, notificaciones, autos, actos administrativos, entre otros documentos), de los siguientes procesos de cobro coactivo:

- Proceso de cobro coactivo 004 de 2022, cuyo título ejecutivo es la Resolución No. 0152 de fecha marzo 2 de 2018, *"Por medio de la cual se declara un incumplimiento al PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE GIRARDOT, ubicado en el Municipio de Girardot, Departamento de Cundinamarca"*.
- Proceso de cobro coactivo 026 de 2022, cuyo título ejecutivo es la Resolución 0831 del 30 de mayo de 2018 *"Por medio de la cual se declara un incumplimiento al URBANIZACIÓN JOAQUÍN ANAYA, ubicado en el municipio de Chiboló, departamento del Magdalena"*.

Sin embargo, como se evidencia, también se solicitó la información relacionada con los procesos de cobro coactivo que se fundamentan en las Resoluciones 0122 del 26 de febrero de 2018, 0152 del 02 de marzo de 2018 y 1714 del 08 de julio de 2021. Al respecto es importante señalar que el 26 de febrero de 2018 se profirió la Resolución N°0122 *"Por medio de la cual se declara un incumplimiento al PROYECTO HABITAD SALUDABLE GIRARDOT, en el Municipio de Girardot-departamento de Cundinamarca"*; Posteriormente, el 02 de marzo de 2018 se profirió la resolución N°0152 *"Por medio de la cual se declara un incumplimiento al PROYECTO HABITAD SALUDABLE GIRARDOT, en el Municipio de Girardot-departamento de Cundinamarca"*. Finalmente, el 08 de julio de 2021 se profirió la resolución N°1714 *"Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto , contra la Resolución N°0152 del 02 de marzo de 2018"*.

Es decir, las resoluciones 0152 del 02 de marzo de 2018 y 1714 del 08 de julio de 2021, corresponden al mismo proceso de cobro coactivo que sería el 004 de 2022.

**SEGUNDO: El MINISTERIO DE VIVIENDA – FONVIVIENDA** dio respuesta a la petición incoada, en los siguientes términos:

Cordial saludo,

Doctora Palacio, reciba un cordial saludo de la Oficina Asesora Jurídica.

En atención a la petición del asunto, en la que en su calidad de apoderado de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C, solicita ***"(...) se remita con destino al suscrito los expedientes digitales completos y actualizados de los procesos de cobro coactivo N°004 de 2022 y 026 de 2022 (...)"***, comedidamente nos permitimos adjuntar link de acceso a expedientes digitales, de los procesos administrativos de cobro coactivo requeridos:

[21. GIRARDOT RES 0152](#)

[14. CHIBOLO](#)

En los anteriores términos, damos respuesta de fondo a su solicitud.

Como se evidencia, el **MINISTERIO DE VIVIENDA – FONVIVIENDA** solamente aportó los expedientes de cobro coactivo de los trámites identificados con los números 004 y 026 de 2022,

omitiendo por completo manifestarse en relación con el proceso de cobro coactivo que se asocia a la Resolución N°0122 del 26 de febrero de 2018 *“Por medio de la cual se declara un incumplimiento al PROYECTO HABITAD SALUDABLE GIRARDOT, en el Municipio de Girardot-departamento de Cundinamarca”*, el cual creemos corresponde al proceso de cobro coactivo 011 de 2022.

**TERCERO:** Al realizar una revisión cuidadosa de los expedientes trasladados por el **MINISTERIO DE VIVIENDA – FONVIVIENDA**, se observó lo siguiente:

1. El acceso al expediente brindado sobre el caso 1 “Cobro coactivo N. 004 de 2022”, permite concluir que el expediente se encuentra incompleto, pues faltan los documentos de los numerales 8, 9, 10, 11, 15. Así mismo, no se observan las constancias de notificación a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de la resolución N. 1714 del 8 de julio de 2021, la cual resolvió recurso de reposición a la resolución N. 0152 del 2018. No se observa el memorial radicado por el municipio proponiendo la reposición. No se observa radicación de recurso por parte de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA tampoco. No se observa notificación del mandamiento de pago a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, entre otros documentos faltantes.
2. El acceso al expediente brindado sobre el caso 2 “Cobro coactivo N. 026 de 2022”, cuenta con documentos numerados como 17 y 17.1, los cuales hacen parte del proceso de Cobro Coactivo N. 011 del 2024, en donde se resuelven excepciones contra el mandamiento de pago, presentadas por el municipio de Girardot, pero estos documentos hacen parte de otro proceso. En conclusión, las actuaciones que registran en el expediente están mezcladas.

Así las cosas, es claro que: (i) No se entregó el expediente del proceso de cobro coactivo 011 de 2022 o de cualquier otro que se encontrara en curso en relación con la Resolución N°0122 del 26 de febrero de 2018; (ii) No se entregaron de forma completa y organizada los expedientes correspondientes a los procesos de cobro coactivo 004 de 2022 y 026 de 2022, pues de conformidad con la misma numeración del Ministerio, es claro que faltan piezas, así mismo se omitió por completo la entrega de constancias de ejecutoria y de notificación de cada uno de los actos y documentos obrantes en los expedientes.

**CUARTO:** Al no existir otro mecanismo por medio del cual exigir a la accionada la información respecto de los expedientes COMPLETOS, ACTUALIZADOS Y ORGANIZADOS de los procesos de cobro coactivo 004, 026 y 011 de 2022, más que de manera directa y dicha forma no ha sido fructífera, solicito al honorable juzgador constitucional para que proteja los derechos fundamentales de mi representada.

### III. DERECHOS VULNERADOS.

Con el actuar de la accionada, el **MINISTERIO DE VIVIENDA – FONVIVIENDA** se ha vulnerado a **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, el derecho de petición contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

En mérito de lo expuesto, se elevan las siguientes:

### IV. PETICIONES.

**PRIMERO:** Tutelar el derecho fundamental de petición que ha sido vulnerado por el accionado a **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, conforme ha sido expuesto en este escrito.

**SEGUNDO:** Ordenar a la accionada que en el término improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, posteriores a la notificación del fallo, se emita y notifique respuesta de fondo a la petición incoada el 3 de enero de 2025 por mi representada, entregando la totalidad de la información deprecada, particularmente en lo al proceso de cobro coactivo 011 de 2022 o cualquier otro que se hubiera iniciado en relación con la Resolución N°0122 del 26 de febrero de 2018, así como los documentos faltantes y las constancias de ejecutoria y notificación de cada una de las actuaciones de los procesos de cobro coactivo 004 y 026 de 2022.

### V. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO.

#### 1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Para abordar este fundamento, debe decirse que la acción de tutela frente a la renuencia de la entidad accionada para la emisión de una respuesta de fondo está llamada a prosperar, por cuanto mi representada no cuenta con otro mecanismo idóneo, célere y eficaz para evitarle el perjuicio irremediable que surgiría como consecuencia del pago de cualquier suma de dinero en virtud de los procesos de cobro coactivo 004, 026 y 011 de 2022, en caso de que los mismos se realicen sin conocer la totalidad de los elementos y las actuaciones surtidas en los trámites administrativos, siendo que la procedencia de esta acción es más un acto de justicia ante una arbitrariedad y total desconocimiento del derecho de petición, que injustificadamente ha debido soportar mi prohijada por las omisiones del Ministerio hoy accionado, relacionadas con la falta de respuesta de fondo de la solicitud del 3 de enero de 2025.

En primer lugar recuérdese que la acción prevista en el artículo 86 de la Constitución Política está consagrada como un mecanismo idóneo para lograr la salvaguarda de los derechos



fundamentales, y procede en tanto el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para lograr que sus derechos sean protegidos; a su vez, la anterior disposición tiene por regla su excepción, vale decir, cuando la tutela se interponga como mecanismo en aras de evitar un perjuicio irremediable, tal como sucede en el presente asunto, pues realizar un desembolso desconociendo las actuaciones gozan de validez, de legalidad, si fueron debidamente notificadas o si por el contrario son nulas de pleno derecho por afectar garantías asociadas al derecho fundamental al debido proceso de mi prohilada, produciría un pago de lo no debido y un enriquecimiento sin justa causa a favor del accionado, situaciones que además de ser claramente contrarias al ordenamiento jurídico vigente redundarían en una merma injustificada en el patrimonio de la entidad accionante, lo que se identifica como un daño inminente, cierto y grave.

Así mismo, en el caso concreto, se cumple con el requisito de subsidiariedad como quiera que **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.** ha emprendido las acciones pertinentes que tenía a su disposición para lograr que la entidad accionada entregara la información solicitada, radicando solicitudes y contactando a los funcionarios, sin recibir ninguna respuesta de fondo, completa y en los términos solicitados, por lo que al no existir otro medio idóneo por el cual proteger sus derechos, resulta procedente impetrar la presente acción constitucional; Al respecto del requisito de subsidiariedad, la honorable Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:

**“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que impliquen la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece - con la excepción dicha- la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.”**<sup>1</sup> (Énfasis propio)

Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que no hay otro mecanismo en el ordenamiento jurídico que permita obtener la información solicitada más que el derecho de petición, el cual ya se ejerció sin tener respuesta de fondo frente al mismo y, por tanto, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, debe analizarse la inmediatez en tanto la misma constituye el segundo requerimiento para la procedencia de la acción de tutela; Respecto de la inmediatez la Corte Constitucional en la sentencia T 087 del 2018, sostuvo:

“La jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez (i) tiene fundamento en la finalidad de la acción, la cual supone la protección

urgente e inmediatez de un derecho constitucional fundamental; (ii) persigue la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros; e (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.”

El análisis de inmediatez en el caso concreto nos lleva a referir que la acción constitucional es ejercida dentro de un término razonable como quiera que la vulneración al derecho fundamental de petición de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. no ha cesado, pues al no haberse proferido respuesta de fondo frente a sus solicitudes, la transgresión a la garantía consagrada en el artículo 23 superior, continua hasta la fecha.

En lo atinente a la legitimación en la causa por activa, debe indicarse que ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. se encuentra plenamente facultado para promover la acción constitucional en la medida que, (i) ejerció de conformidad con sus derechos fundamentales aquella prerrogativa consagrada en el artículo 23 superior, sin que la misma se haya garantizado por parte del accionado y, (ii) funge como parte en los procesos de cobro coactivos en los cuales se solicitó la información que no se entregó injustificadamente por el accionado lo que generó la vulneración de su derecho fundamental de petición.

En relación con la legitimación de mi prohijada, es importante señalar que la aseguradora forma parte de los trámites de cobro coactivo, por lo que no hay duda alguna de que le asiste un interés legítimo en conocer dichos trámites.

Así mismo, es importante resaltar que la jurisprudencia constitucional de antaño ha aceptado que las personas jurídicas se encuentran legitimadas para promover acciones de tutela cuando sus derechos fundamentales son amenazados o vulnerados por las acciones u omisiones de otros entes o personas.

En conclusión, es claro entonces para el caso concreto nuestra demanda de amparo se ajusta a los requisitos de la acción de tutela y es por ello por lo que debe imprimírsele el trámite de viabilidad correspondiente.

## **2. VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN.**

La entidad accionada al no brindar de forma completa y actualizada la información solicitada por mi representada a sabiendas de que la misma forma parte de los procesos de cobro coactivo en virtud del otorgamiento que dio a los contratistas de las diferentes pólizas de cumplimiento vinculadas a dichos trámites, vulnera el derecho fundamental de petición de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. sometiéndola a una serie de erogaciones cuya configuración no tiene forma de verificar la aseguradora y que de realizarse sin conocimiento de la totalidad de las actuaciones persuasivas y coactivas, produciría un pago de lo no debido y un enriquecimiento sin justa causa a favor de la accionada, situación que en modo alguno puede convalidar el juez

de tutela.

Sea lo primero mencionar que el derecho de petición tiene una amplia protección desde el Constituyente de 1991 y es por ello por lo que este encuentra consagración en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la cual lo estatuyó a favor de las personas jurídicas y naturales, al respecto del mentado derecho, la Corte Constitucional ha indicado en sentencias como la T-957 de 2011, C- 341 de 2014 y T-036 de 2018 lo siguiente:

“El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Con fundamento en la citada norma, en varias oportunidades esta corporación ha definido el ámbito de protección del derecho fundamental de petición. Así las cosas este incorpora en su núcleo esencial los siguientes elementos:

- (1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.
- (2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes.
- (3) **El derecho a recibir una respuesta de fondo**, lo que implica que la autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, se pronuncie de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado; esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado.
- (4) El derecho a obtener una pronta comunicación de lo decidido”.<sup>1</sup>

Lo expuesto indica que, toda persona jurídica o natural tiene derecho a solicitar información mediante peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución **de fondo** respecto de estas, salvo que haya una reserva de carácter legal en relación con la información según reza el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015:

**Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.** Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.

Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.

**Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política**

<sup>1</sup> Sentencias T-508 de 2007, T-435 de 2007, T-274 de 2007 y T-149 de 2007.



y la ley. (...)

Es decir, la única razón por la cual una entidad o particular competente para resolver de fondo una petición podría negarse a entregar información o documentación, sería la reserva legal o constitucional de la misma; Sin embargo, en el caso concreto, el **MINISTERIO DE VIVIENDA - FONVIVIENDA** no enuncia ninguna fuente legal o constitucional que consagre la reserva de la información solicitada y por consiguiente avale su postura de no entregar de forma completa la información requerida por mi prohijada mediante derecho de petición adiado al 3 de enero de 2025.

Es importante resaltar que la información que se requirió mediante la petición del 24 de septiembre del 2024 no se solicitó por un mero capricho de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., sino que, contar con tal información, es imperativo a efectos de garantizar que en efecto los trámites de cobro coactivo no se encuentren viciados de nulidad, situación que no se puede verificar ante la ausencia de piezas procesales, falta de constancias de notificación y de ejecutoria, entre otras.

Para finalizar, se itera que las consecuencias de no conocer la información solicitada mediante el derecho de petición fechado al 3 de enero de 2025 implican el pago de lo no debido a favor del accionado y, por ende, un enriquecimiento sin justa causa para el mismo, situaciones éstas que riñen contra el ordenamiento jurídico e implican un desconocimiento cabal de los derechos fundamentales de mi prohijada.

En conclusión, al existir una vulneración contra **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, resulta imperativo que el honorable juez constitucional acceda a las peticiones formuladas y ampare el derecho fundamental de petición de mi representada, en tanto la información que se solicitó atañe a una serie de contratos de los cuales es parte y que tiene la virtualidad de afectar eventuales erogaciones en la que debería incurrir.

## **VI. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 2591 DE 1991: JURAMENTO.**

Manifiesto bajo gravedad de juramento que no se ha invocado acción de tutela bajo los mismos hechos o supuestos de hecho y/o jurídicos, y que todo lo anteriormente escrito en el documento es verídico.

## **VII. PRUEBAS**

1. Derecho de petición incoado el 3 de enero de 2025.
2. Respuesta a derecho de petición.

**IX. ANEXOS**

1. Certificado de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Cédula de ciudadanía del suscrito abogado.
3. Tarjeta profesional del suscrito abogado.

**X. NOTIFICACIONES.**

Para todos sus efectos, ruego se tomen como direcciones las siguientes:

La Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Calle 18 No. 7 – 59 en la ciudad de Bogotá. Para efectos de notificación electrónica, según lo previsto en el art. 162 Núm. 7 del CPACA, la dirección electrónica es: [notificacionesjudici@minvivienda.gov.co](mailto:notificacionesjudici@minvivienda.gov.co)

El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA en la Calle 18 No. 7 – 59 en la ciudad de Bogotá. Para efectos de notificación electrónica, según lo previsto en el art. 162 Núm. 7 del CPACA, la dirección electrónica es: [notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co](mailto:notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co)

**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.:**

- Correos electrónicos: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co) y [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co)
- Teléfonos: 464330.
- Direcciones físicas: Cr 7 No 72 - 13 Pi 8 de Bogotá D.C; AV 6ª A # 35N - 100  
Oficina 212 de Cali, Valle del Cauca y CI 100 No. 9 A -45 P 12.

Finalmente, se indica que la dirección electrónica [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co) se encuentra debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados – SIRNA.

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

